

“La necesidad de la verdad y la justicia en el caso Ayotzinapa”

Dr. David Velasco Yáñez, sj

Cada pueblo tiene el derecho inalienable a conocer la verdad acerca de los acontecimientos sucedidos en el pasado en relación con la perpetración de crímenes aberrantes y de las circunstancias y los motivos que llevaron, mediante violaciones masivas o sistemáticas, a la perpetración de esos crímenes. El ejercicio pleno y efectivo del derecho a la verdad proporciona una salvaguardia fundamental contra la repetición de tales violaciones. (Principio 2. El derecho inalienable a la verdad)
(Orentlicher 2005: 7)

A casi tres años del trágico acontecimiento de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal Rural “Isidro Burgos”, de Ayotzinapa, seguimos sin saber realmente qué ocurrió y la impunidad¹ se mantiene. La construcción de la mal llamada “verdad histórica” de su asesinato e incineración en el basurero de Cocula, ha sido sepultada por el trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Las líneas de investigación que propusieron siguen sin ser atendidas por las autoridades federales. La protección al ejército federal parece que sigue siendo la consigna principal. El derecho a la verdad, como parte fundamental del derecho a la justicia y la reparación del daño, así como el establecimiento de medidas de no repetición de este crimen de lesa humanidad, sigue siendo uno de los mayores desafíos que enfrentamos en México.

Intentaremos exponer las bases, fundamentos y principales mecanismos para la correcta aplicación del derecho a la verdad, según lo establece el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas

¹ “Por impunidad se entiende la inexistencia, de hecho o de derecho, de responsabilidad penal por parte de los autores de violaciones, así como de responsabilidad civil, administrativa o disciplinaria, porque escapan a toda investigación con miras a su inculpación, detención, procesamiento y, en caso de ser reconocidos culpables, condena a penas apropiadas, incluso a la indemnización del daño causado a sus víctimas”. (Orentlicher 2005: 6)

e Involuntarias (GTDFI s/f: 27 – 35), en su Comentario General al respecto, y de cómo esta visión de un mecanismo de la ONU aporta luces a la comprensión de la lucha de los padres de los normalistas de Ayotzinapa.

Esta mirada a la tragedia que padecen las y los familiares de los normalistas de Ayotzinapa, permite dimensionar la problemática del derecho a la verdad, la imposición de una “mentira histórica” y el carácter continuado de una forma de tortura, que es también un delito de lesa humanidad y fundamentar lo justo de una demanda fundamental, como es el derecho a saber a ciencia cierta qué fue lo que ocurrió con 43 normalistas, así como lo que sucedió realmente con las más de 30 mil desapariciones forzadas que se llevan contabilizadas hasta el momento, en fechas en las que se conmemora la ejecución extrajudicial de migrantes en San Fernando, Tamaulipas, otro hecho que reclama el derecho a la verdad.

Lo primero que es necesario afirmar, es que “El derecho a la verdad... está actualmente ampliamente reconocido en derecho internacional”. (GTDFI s/f: 27) Esto quedará demostrado en esta compilación en la que se alude a todos los instrumentos que reconocen el derecho a la verdad, desde el artículo 32 del Protocolo I de los Convenios de Ginebra, hasta la misma Declaración y la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.

Destaca el reconocimiento del derecho a la verdad como un derecho autónomo, un derecho tanto colectivo como individual y una salvaguarda fundamental contra la repetición de este tipo de violación, tanto del derecho a la verdad como del derecho fundamental a la vida. El GTDFI nos recuerda las obligaciones del estado de promover la verdad, así como la aplicación de una reparación adecuada, pues son procesos fundamentales para evitar que las desapariciones forzadas

se sigan produciendo, pues “la reconciliación entre el Estado y las víctimas de desapariciones forzadas no puede tener lugar sin el esclarecimiento de todos los casos individuales”. (GTDFI s/f: 29)

En su Comentario General, el GTDFI establece diversas obligaciones que se derivan del derecho a la verdad. La primera es que “El derecho a la verdad en relación con las desapariciones forzadas se refiere al derecho de conocer los progresos y resultados de una investigación, la suerte y el paradero de las personas desaparecidas y las circunstancias de la desaparición, así como la identidad del autor o los autores de la desaparición”. (GTDFI s/f: 30) Es evidente, que ninguna de estas obligaciones ha cumplido el estado mexicano en el caso Ayotzinapa; en casi tres años, los familiares han sido engañados para justamente conocer los avances de las investigaciones y no han sido atendidas sus propuestas de cumplir con las recomendaciones del GIEI.

Una segunda obligación planteada por el GTDFI, tiene que ver con distinguir el derecho a la verdad en relación con las desapariciones forzadas, “del derecho a la información y, en particular, del derecho de los familiares y otras personas con un interés legítimo y sus representantes o abogados a obtener información sobre una persona privada de libertad”. (GTDFI s/f: 30)

El GTDFI considera que “la denegación de información restringe el derecho a la verdad... una denegación rotunda, constituye una violación del derecho a la verdad.”. (GTDFI s/f: 30) Esta obligación nos da una idea de cómo el estado mexicano ha violentado este derecho denegando información fundamental, como en el caso de la postura de la Sedena de cerrar sus puertas al GIEI y, luego, negar información que le ha sido solicitada.

Hay una cuarta obligación del estado que es la de seguir investigando. El problema, para el caso Ayotzinapa, es la construcción de una supuesta “verdad histórica” que, a pesar de que fue destruida por el trabajo del GIEI, ha sido ratificada recientemente en la sesión de la CIDH realizada en Lima, Perú. Dice el GTDFI: “La obligación de seguir investigando mientras no se hayan esclarecido la suerte y el paradero de la persona desaparecida es una consecuencia del carácter continuado de las desapariciones forzadas”. (GTDFI s/f: 31)

De esta obligación se desprende el carácter absoluto del derecho a la verdad, no sujeto a ningún tipo de limitación o suspensión, pues, “Este carácter absoluto se deriva también del hecho de que la desaparición forzada causa “angustia y pesar” a la familia, un sufrimiento que se sitúa en el umbral de la tortura”. (GTDFI s/f: 31) Esta observación es clave y nos llega a afirmar que estos tres años han sido para las y los familiares de los normalistas de Ayotzinapa una verdadera tortura continua al seguir sin saber el paradero de sus hijos, hermanos desaparecidos.

Para el GTDFI, es claro que las obligaciones del estado son fundamentalmente de procedimiento e incluyen: “la obligación de investigar hasta que se esclarezca la suerte y el paradero de la persona; la obligación de comunicar los resultados de las investigaciones a las partes interesadas...; la obligación de facilitar el pleno acceso a los archivos; y la obligación de proporcionar una protección plena a los testigos, los familiares, los jueces y otras personas que participen en cualquier investigación”. (GTDFI s/f: 31 – 32)

Para el caso Ayotzinapa, resulta relevante que el GTDFI llegue a una afirmación contundente, en el sentido de que “en tanto que principio general, no se presumirá, con la oposición de la familia, que la víctima de una desaparición forzada ha fallecido”. (GTDFI s/f: 32) Contra lo que el imaginario

más extendido, impuesto por los medios de paga, de que no es posible que los normalistas estén vivos. De ahí la relevancia de la consigna “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”

El GTDFI es consciente de la controversia que subsiste en si el derecho a la verdad debe revelar el nombre de los autores como consecuencia de ese derecho, para lo cual afirma que “se ha sostenido que no conviene divulgar el nombre de los autores en procesos como las ‘comisiones de la verdad’, cuando los autores no gozan de las garantías legales que normalmente se conceden a las personas en un proceso penal, en particular el derecho a la presunción de inocencia”. (GTDFI s/f: 33) Para el caso Ayotzinapa, como en todos los casos de desapariciones forzadas, el problema no radica tanto en que se conozcan los nombres de los autores, sino que se logre identificar la cadena de mando.

Si hay algo de lo que de manera insistente los padres de los normalistas de Ayotzinapa han denunciado, son las amenazas, intimidaciones, hostigamientos, intentos de sobornarlos por parte de agentes del estado. A este respecto, el GTDFI afirma que “el derecho a la verdad asegura también que el Estado tiene la obligación de proporcionar la protección y la asistencia necesarias a las víctimas, los testigos y otras personas interesadas.”. (GTDFI s/f: 34)

Bibliografía

CDH – ONU, Informe de Diane Orentlicher, “Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad, 8 de febrero de 2005, E/CN.4/2005/Add.1 [De: http://ap.ohchr.org/documents/dpage_s.aspx?si=E/cn.4/2005/102/Add.1 , Vi 21.08.17]

CDH – ONU, Estudio sobre el derecho a la verdad. E/CN.4/2006/91 [De: <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G06/106/59/PDF/G0610659.pdf?OpenElement> , Vi 21.08.17]

GTDFI, Comentario General sobre el derecho a la verdad en relación con las desapariciones forzadas páginas [De:

http://www.ohchr.org/documents/Issues/Disappearances/GeneralCommentsDisappearances_sp.pdf Vi 21.08.17]